



Bogotá, D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

REFERENCIA

EXPEDIENTE No.: 11001-33-35-010-2020-00277-00.
ACCIONANTE: NÉSTOR GARCÍA BUITRAGO.
ACCIONADO: PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
ASUNTO: MEDIDA CAUTELAR.

Acorde con lo previsto por el inciso cuarto del artículo 233 de la Ley 1437 de 2011, procede el Despacho a decidir la solicitud de medida cautelar presentada por la parte accionante, previas las siguientes consideraciones:

I. ANTECEDENTES

NÉSTOR GARCÍA BUITRAGO, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, interpuso demanda contra la **PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.**, tendiente a obtener la nulidad del Auto No. 977 del 06 de septiembre de 2018, por medio del cual se resolvió sancionar al accionante, con destitución e inhabilidad general para el ejercicio del cargo que venía ejerciendo, éste es, Secretario Distrital de Ambiente, Código 020, Grado 09, o en cualquiera que ejerza funciones públicas, por el término de 10 años, y de la Resolución No. PSI No. 1396 del 20 de diciembre de 2018, la cual confirmó el fallo sancionatorio de primera instancia; con el consecuente restablecimiento del derecho.

Con escrito independiente, el demandante solicitó que, como medida cautelar, por este Despacho se declare la suspensión provisional de los actos administrativos descritos en precedencia. Sin argumentar las razones por las cuales efectuó dicho requerimiento.

II. EL TRÁMITE SURTIDO

En acatamiento a lo previsto por el inciso segundo del artículo 233 de la citada ley, el Despacho a través de providencia de fecha 25 de marzo de 2021, corrió traslado a la demandada de la petición de medida cautelar, en aras de la protección a los derechos constitucionales de defensa y contradicción.

El auto en cita fue notificado personalmente a la Personería de Bogotá, D.C., el día 14 de abril de 2021. En atención a lo anterior, a través de correo electrónico calendado 21 de abril último, la entidad accionada se pronunció al respecto, haciendo alusión, entre otros asuntos, a la jurisprudencia y normativa que se tiene establecida sobre el tema de medidas cautelares, e indicando que la solicitud de medida objeto de estudio del presente trámite, no cumple con ninguno de los requisitos exigidos por ley, como tampoco demostró el actor encontrarse en alguna situación que le ocasione perjuicio irremediable alguno.



Así entonces, concluye con manifestar que en el presente asunto, no están dadas las premisas para ordenar la suspensión provisional de los actos disciplinarios demandados; además que considera que los actos aquí acusados gozan de legalidad. En tales virtudes, solicita la negación de la solicitud de medida cautelar de la referencia.

II. CONSIDERACIONES

Dispone el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, que en todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el operador judicial, decretar, previa motivación, las medidas necesarias para brindar protección y garantizar, de manera provisional, el objeto y la efectividad de la sentencia, sin que ello implique un prejuizgamiento.

Por su parte, el artículo 230 de la misma norma, establece que las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda, hallándose dentro de ellas la de ordenar la adopción de una decisión administrativa.

Así mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuándo se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud, así mismo sí se pretende el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

Teniendo en cuenta lo anterior, y una vez revisadas las piezas procesales dentro del presente proceso, encuentra el Despacho que frente a la medida cautelar solicitada, no concurren la totalidad de los requisitos señalados en la ley, pues el aquí demandante, como bien fue señalado en párrafos anteriores, no argumentó, ni justificó las razones que permitieran concluir, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla, como tampoco aportó los respectivos soportes con el propósito de poder efectuar el estudio correspondiente.

En segundo lugar, la solicitud de medida cautelar presentada no cumple ninguna de las condiciones tanto del perjuicio irremediable, como la existencia de serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida, los efectos de la sentencia serían nugatorios.

Ello, teniendo en cuenta que no se logra tener un grado de certeza y suficientes elementos fácticos que demuestren que de no llegar a expedirse un acto administrativo que cese los efectos jurídicos producidos por los actos administrativos demandados, se generaría un perjuicio grave, que suponga un



detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona, tanto moral como material¹, pues de la revisión de las pretensiones se tiene que lo que aquí se debate, es la cesación de los efectos jurídicos producidos por los actos administrativos acusados, los cuales ocasionaron como resultado, una sanción al accionante consistente en su destitución y inhabilidad del cargo que venía desempeñando como Secretario Distrital de Ambiente, Código 020, Grado 09, o en cualquiera que ejerza funciones públicas, por el término de 10 años.

Conforme a las anteriores razones, el Despacho no accederá al decreto de la medida cautelar, por cuanto no concurrieron los requisitos establecidos en la ley, para que sean procedentes las medidas cautelares solicitadas.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de medidas cautelares presentada por la parte accionante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría del Despacho que, una vez notificado el presente auto, ingrese el expediente para continuar con el trámite procesal correspondiente.

TERCERO: Reconocer personería adjetiva a **JUAN CARLOS NOVOA BUENDÍA** con cédula de ciudadanía No. **13.742.384** y Tarjeta Profesional No. **120.378** del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en este proceso como apoderado de la **PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.**, en los términos y para los efectos del mandato conferido dentro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ VICENTE CIFUENTES SALAZAR
JUEZ

JGR

¹ Lo anterior fue delimitado por la Corte desde la sentencia T-225 de 1993, Magistrado ponente Vladimiro Naranjo Mesa y reconocidas por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993, Magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara.